**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA NÚMERO: 114/2010 y
su acumulado 148/2010.**

SERVIDORA PÚBLICA:

México, Distrito Federal, a ocho de agosto de dos mil once.

VISTOS; para emitir resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa **114/2010 y su acumulado 148/2010;** y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Denuncia. Mediante oficio C-DGRARP/DRP/2272/2010 de catorce de julio de dos mil diez, el Director de Registro Patrimonial informó a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de este Alto Tribunal, que la servidora pública *****, con el cargo de Técnico Operativo adscrita a la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Aguascalientes, Aguascalientes, **no presentó** su declaración de modificación patrimonial ni la declaración de conclusión en el cargo ambas en el año de dos mil nueve; por ese motivo se ordenó la apertura de los cuadernos de investigación **C.I. 114/2010 y su acumulado 148/2010,** respectivamente.

SEGUNDO. Procedimiento. Por acuerdo de trece de mayo de dos mil once, el Contralor de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación ordenó iniciar a trámite el procedimiento de responsabilidad administrativa **114/2010 y su acumulado 148/2010** en contra de la persona señalada, por estimar la existencia de elementos suficientes para presumir que incurrió en la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 8º., fracción XV, en relación con el 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como, en los artículos 50, fracción XXV, y 51, fracción II, del Acuerdo General Plenario 9/2005 de este Alto Tribunal. Se ordenó requerir a la citada servidora pública a efecto de que en el plazo de cinco días hábiles rindiera el informe relativo y exhibiera las pruebas que estimara pertinentes.

En auto de treinta de mayo de dos mil once, el Contralor tuvo por rendido en tiempo y forma el informe requerido a dicha servidora pública, teniendo por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que presentó; y, por auto de tres de junio de dos mil once, declaró cerrada la instrucción en términos del artículo 39, segundo párrafo, del citado Acuerdo General Plenario. Por diverso proveído del cinco de julio del año en cita, se emitió el dictamen respectivo.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, de conformidad con

lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXI, y 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los artículos 23 y 25, segundo párrafo, del Acuerdo General Plenario 9/2005, en tanto se trata de una servidora pública de este Alto Tribunal a la que se le atribuyen conductas infractoras que no están catalogadas como graves.

SEGUNDO. Marco normativo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4°. del Acuerdo General Plenario 9/2005 de veintiocho de marzo de dos mil cinco, en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en él serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, en lo que no se oponga a esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudirse a los principios generales de derecho.

TERCERO. Análisis de la conducta atribuida a la ex servidora pública. Del auto que dio inicio al presente procedimiento de responsabilidad administrativa, se advierte que la conducta administrativa que se atribuye a la ex servidora de mérito es la prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 8°. , fracción XV, en relación con el 37, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como, en los artículos 50, fracción XXV, y 51, fracción II, del Acuerdo General Plenario 9/2005 de este Alto

Tribunal, consistente en presentar la declaración de conclusión en el encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes al en que se dé ese supuesto y la declaración de modificación patrimonial durante el mes de mayo de dos mil diez, se subsume con la presentación de la declaración de conclusión.

De las constancias que obran en autos, las que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93, fracción II, 129, 197, 202 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que:

A. Se le otorgaron diversos nombramientos como Técnico Operativo, a partir del dieciséis de marzo de dos mil ocho, adscrita a la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Aguascalientes, Aguascalientes como se indica:

Nombramiento	Puesto	Periodo	Foja
Técnico Operativo	Fijo	16 de marzo al 15 de junio de 2008	156
Técnico Operativo	Fijo	16 de junio al 15 de septiembre de 2008	139
Técnico Operativo	definitivo	16 de septiembre 2008	131

Así mismo, está probado que a dicha ex servidora pública le fueron otorgadas dos licencias (fojas 115 y 120 del expediente principal), una por cuarenta y cinco días y otra por sesenta días, inmediatos, que suman un total de ciento cinco días, lo que acredita que estaba obligada a presentar declaración de situación

patrimonial de conclusión, a más tardar el **quince de marzo de dos mil diez**, ya que los sesenta días que establece la ley relativa, comenzaron a partir de que se le otorgó la primer licencia, esto es, a partir del dieciséis de enero de dos mil diez.

B. De la cédula de funciones de dicha ex servidora pública (visible a foja 24 del expediente principal), por lo que es de concluir que de una forma u otra intervenía en la captación, resguardo y/o depósito de recursos públicos, así como en el manejo de los bienes propiedad de este Alto Tribunal como resultado de la organización del trabajo y, por ende, estaba obligada a presentar declaraciones de situación patrimonial.

De esta forma, con los medios de prueba a que se ha hecho referencia, se arriba a la convicción de que *********, al haber solicitado licencias sin goce de sueldo que en suma excedieron de tres meses, estaba obligada a presentar declaración patrimonial de conclusión, dentro de los sesenta días naturales al en que dejó el puesto de Técnico Operativo adscrita a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Aguascalientes, Aguascalientes, sin que en las constancias de autos se advierta que la ex servidora pública mencionada haya cumplido con dicha disposición.

Ahora, no obstante que ********* dejó el cargo referido desde el quince de enero de dos mil diez, cabe destacar que mediante oficio DGRARP/DRP/084/2011 (visible en original a foja 175 del expediente principal), el Director de Registro

Patrimonial informó que al treinta y uno de enero del año en curso, ***** no había presentado la declaración de conclusión.

No pasa inadvertido el escrito presentado como informe el veintisiete de mayo de dos mil once, ya que no tiene el carácter de presentación de declaración de situación patrimonial, (foja 191 del expediente principal), debido a que la servidora pública manifestó:

- a) Inició en el puesto de Técnico Operativo en la Casa de Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, con un sueldo de \$10,663.77 (diez mil seiscientos sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional), el dieciséis de marzo de dos mil ocho, concluyendo el mismo el dieciséis de enero de dos mil diez, por lo que al no estar laborando en esa sede, no recibió el oficio "C.I. 114/2010", obligándole a presentar declaración de modificación patrimonial de dos mil nueve, ni el diverso "C-DGRARP/2361/2010" con el que se le obligaba a presentar declaración de conclusión del cargo, con motivo de la baja que causó en abril de dos mil diez y por el que se inició, de oficio, el cuaderno de investigación C.I. 148/2010.

Ahora bien, lo argumentado por ***** en cuanto a que dejó de laborar a partir del dieciséis de enero de dos mil diez y que por lo mismo no tuvo conocimiento de los oficios "C.I. 114/2010" y "DGRARP/2361/2010", con los que se le obligaba a presentar las declaraciones de modificación correspondiente a dos mil nueve y de conclusión del cargo, respectivamente, deviene infundado, toda vez que los oficios que señala no existen como tales,

y menos aún como recordatorios de la obligación que tenía ***** de presentar declaraciones de situación patrimonial, ya que el primero mencionado corresponde al número de cuaderno de investigación que, en su momento, se otorgó a este expediente y el segundo es con el que el Director de Registro Patrimonial denunció la omisión de dicha ex servidora pública de presentar declaración de modificación patrimonial.

- b) Agrega que ignoraba que tenía que presentar declaración de conclusión, porque el aviso de baja es de treinta de abril de dos mil diez, el cual está signado por el entonces Director General de Personal y del que se aprecia un sello que indica “EXPEDIENTE” de “AGO.02 2010”, es decir, que se emitió cuando ya no laboraba en este Alto Tribunal, pues su cargo concluyó el dieciséis de enero de dos mil diez, lo que resulta ineficaz para desvirtuar la infracción atribuida, contrario a ello, la mención que hace acerca de que el puesto que ocupaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó el dieciséis de enero de dos mil diez.

Luego, de la sola lectura de los artículos 37, fracción II y 51, fracción II, se concluye que la obligación de presentar declaración de conclusión, surge cuando se deja el cargo conferido, de manera alguna está constreñida a que se emita el documento en que consta la separación del cargo, conocido como aviso de baja, de ahí que a partir del día siguiente a que ***** dejó el puesto de Técnico Operativo en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Aguascalientes, Aguascalientes, comenzó el plazo de sesenta días

naturales que tenía para presentar la declaración de conclusión.

c) No estaba obligada a presentar declaración de conclusión del cargo, pues no manejaba o aplicaba recursos económicos, presupuestales, valores y fondos de la Federación, ni realizaba actividades de inspección o vigilancia, no llevaba a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, así como tampoco intervenía en la adjudicación de pedidos y contratos, como se establece en el artículo 50, fracción XXVIII, del Acuerdo General Plenario 9/2005 y agregó que las funciones que desempeñó como Técnico Operativo, adscrita a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Aguascalientes, Aguascalientes eran: *“(…) apoyo en eventos, control de asistencia a los eventos y captura, reporte global de los mismo, control de evaluación de disertantes, control de visitas guiadas, logística de los eventos libres y programados, apoyo en sus actividades propias de la institución, sin que ninguna de esas actividades implicara el manejo de recursos de la Institución.”*

En este sentido, la sola negación de ***** de que sus funciones no se vinculaban con el manejo de recursos económicos o presupuestales es insuficiente para desvirtuar la conclusión contraria, pues se argumentó que la organización de eventos, función reconocida por ella y el apoyo en actividades propias de la casa de la cultura, eran funciones que implicaban de una forma u otra el manejo de recursos económicos o presupuestales, sin embargo, se

insiste, no expone argumento alguno sobre esa conclusión, sino que se limita a negarlo, situación que en términos del artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, dicha negativa implica una afirmación que debe estar probada por quien la hace.

En tal orden, existen elementos suficientes para tener por demostrado que la ex servidora pública incumplió con la obligación de presentar su declaración de conclusión en el cargo, conducta que encuadra en el supuesto de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los artículos 8º., fracción XV, 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 50, fracción XXV, y 51, fracción II del Acuerdo General Plenario 9/2005 de este Alto Tribunal.

CUARTO. Sanción. Al quedar demostrada la infracción administrativa atribuida a *****, se procede a individualizar la sanción que le corresponde conforme a lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 46 del Acuerdo General Plenario 9/2005, en los siguientes términos:

- a) **Gravedad de la sanción.** La conducta atribuida a la infractora no está tipificada como grave, toda vez que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos

en el artículo 131, fracciones I a VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 8º., fracciones VIII, X a la XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

b) Nivel jerárquico y antigüedad en el servicio. De las copias fotostáticas certificadas del expediente personal de la infractora que obran en autos, se advierte que ingresó a laborar en este Alto Tribunal el dieciséis de marzo de dos mil ocho.

c) Condiciones exteriores y los medios de ejecución. De las constancias del expediente, se advierte que la infractora no presentó su declaración de modificación patrimonial y la declaración de conclusión en el encargo dentro del plazo previsto; a pesar de que fue informada de que estaba obligada, y no se tiene evidencia que lo hubiese realizado pese a que se le notificó el inicio del presente procedimiento, lo que refleja la falta de transparencia en su actuar.

d) Reincidencia. Del registro de servidores públicos sancionados no se advierte que *****, lo haya sido previamente con motivo de alguna falta administrativa.

e) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. En la especie no existe prueba de que la infractora hubiese obtenido algún beneficio o lucro indebido, o hubiera ocasionado daño o perjuicio económico a este Alto Tribunal con motivo de la infracción en que

incurrió, máxime que la falta es estrictamente formal, por incumplir con un deber.

En mérito de las consideraciones que anteceden y atendiendo a la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan el deber que se impone a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de presentar su declaración de conclusión en el encargo dentro de los sesenta días naturales a partir de que se dé ese supuesto, así como a la conducta procesal observada por la infractora durante el desarrollo de este procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXI, y 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 45 y 46 del Acuerdo General 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Presidencia estima que se debe imponer a la infractora la sanción de **amonestación pública**, que se ejecutará por el Contralor de este Alto Tribunal en términos de lo establecido en el citado Acuerdo.

Asimismo, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada al expediente personal de *****.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. ***** incurrió en la falta administrativa materia del presente procedimiento.

SEGUNDO. Se impone a ***** la sanción de amonestación pública.

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con el Doctor Fernando Altamirano Jiménez, Contralor de este Alto Tribunal que da fe.

Esta hoja corresponde al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 114/2010 y su acumulado 148/2010, instaurado en contra de ***** . Conste.

JGCR/jht.

“En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13,14 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.